

Ciepp

CENTRO INTERDISCIPLINARIO PARA EL ESTUDIO DE POLITICAS PUBLICAS



Toda protesta es política

Roberto Gargarella¹

Denunciar una protesta por su carácter político es negarse a reflexionar sobre ella. Toda protesta tiene un contenido político y ese contenido no la "ensucia", sino que le confiere su dignidad. El carácter político debe representar el presupuesto con el que nos acercamos a la protesta y no la premisa final de un discurso condenatorio sobre el conflicto.

A nadie se le escapa que los eventuales líderes de una protesta suelen moverse por motivaciones cruzadas, que acostumbran a incluir demandas interesadas, las propias apetencias políticas de sus líderes o la pretensión de debilitar al gobernante de turno. Pero esto no constituye ninguna sorpresa: se trata de la materia prima básica de cualquier protesta.

Desde las movilizaciones indigenistas en Ecuador hasta las protestas de los

estudiantes chilenos, los manifestantes siempre reclaman ante todo por razones primariamente vinculadas con su propio interés. Nadie puede esperar que el PSOE proteste contra el gobierno de Mariano Rajoy o la izquierda griega contra un gobierno que ajusta olvidando sus motivaciones político-partidarias: la democracia se nutre precisamente de tales disputas.

Se dirá, entonces, que "allí reside justamente la diferencia: resultan incomparables las protestas que se llevan adelante en contra de programas de ajuste en Europa y las que se desarrollan hoy en nuestro país". El punto es clave en esta discusión, pero, lamentablemente, el oficialismo lleva todas las de perder. La pregunta que debe responder el Gobierno es: ¿existen en nuestro país derechos fundamentales violados de modo profundo, permanente y extendido? La respuesta es sí, las violaciones de derechos están, son gravísimas, se extienden desde hace años y recaen de modo sistemático sobre los más débiles de la sociedad. Eso es lo que importa cuando se piensa sobre la justificación de la protesta.

El oficialismo reacciona como lo hizo

¹ Profesor de Derecho Constitucional (UBA – UTDT)

la Presidenta y dice: "Debe valorarse lo ya hecho, el Gobierno hace su parte lo mejor posible". Como suele ocurrir, el relato es eficaz pero falso. A pesar de haber contado con mayorías legislativas durante años, de sus alianzas políticas impresentables, de sus insistentes e injustificados pactos con lo peor del sindicalismo y el empresariado, de que los niveles de pobreza y desigualdad son similares a los de la época menemista, de que la reforma impositiva no apareció jamás y la reforma política se enunció y murió casi el mismo día, y de que se siguen otorgando concesiones y licencias a figuras temibles a cambio de prestaciones y servicios pésimos. En resumen, se violan derechos constitucionales de modo gravísimo, como resultado y no a pesar de la acción del Gobierno.

Que la protesta social se encuentre justificada no "angeliza" ni inmuniza jurídicamente a sus promotores. Si algunos de los que hoy protestan se han enriquecido a través de negocios impúdicos, ello ha sido gracias a -y no en contra de- este gobierno.

La pregunta que queda por revelar es si el kirchnerismo será capaz de reconocer su responsabilidad por la masiva violación de derechos. Los procedimientos con los que el Gobierno desde hace años decide -en soledad, en secreto, sin consultar a nadie, sin escuchar a sus críticos, sin leer cifras que le sean adversas, sin tomar en serio nunca a la oposición- sugieren que no.

Diario La Nación - Opinión

29 de junio de 2012